

Estados Unidos y México: Seguridad nacional fronteriza después del 11 de septiembre

Dr. Dennis J. Bixler-Márquez
Universidad de Texas en El Paso

Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 han afectado las relaciones de Estados Unidos con México en su frontera común de 3,181 kilómetros, a consecuencia del aumento en la vigilancia en dicha zona. La política de seguridad nacional norteamericana ha jugado un papel muy importante en esta relación binacional. Heyman (2001), experto en cruces fronterizos, afirma que los cruces internacionales típicamente absorben el impacto de la política oficial del momento, particularmente en los sectores administrativos. El Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Carlos Vidali (2003), reitera que la frontera norte sigue siendo problemática para el comercio y que la población fronteriza sufre en general de la situación actual. Algunos problemas peculiares de carácter administrativo y político en esta frontera se agudizan, mientras otros, se mejoran paulatinamente durante este período inestable de relaciones, como resultado de la nueva atención federal americana a la zona fronteriza (El Paso Times, 2002a). Cabe añadir, que las autoridades mexicanas también han aumentado su vigilancia en la frontera y aeropuertos, pero a un nivel que no afecta al comercio o el flujo de la población fronteriza. Este breve análisis se enfoca en tres áreas de impacto inmediato en la frontera de EEUU con México, utilizando ejemplos primordialmente de la zona de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, una zona metropolitana binacional que también colinda con el estado de Nuevo México en Estados Unidos. Se analiza como afecta

la legislación americana de seguridad nacional y las subsecuentes medidas administrativas a la frontera después del 11 de septiembre, al comercio y a la transportación, la política migratoria y el tránsito de población, y la educación superior.

Comercio y transportación

Antes del 11 de septiembre la relación comercial entre Estados Unidos y México ya disonaba sobre asuntos agrícolas y del transporte comercial binacional prescrito por el tratado de libre comercio. Además, el declive de la economía americana causaba también problemas a la economía fronteriza y era una barrera política para negociar asuntos en áreas como el de aranceles. Estados Unidos dilató hasta el 28 de noviembre del 2002 la autorización para que transportes de carga mexicanos circularan libremente dentro del país – anteriormente su circulación estaba restringida a la franja fronteriza del lado americano.

Esta demora se debió a la fuerte oposición por sindicatos de camioneros americanos y gobiernos locales y estatales que aseguran que los camiones mexicanos constituyen una amenaza en las carreteras estadounidenses. Del lado mexicano, relata Piñeyro (2003), que había gran inconformidad por campesinos cuyos productos no pueden competir con los americanos, manifestada via la campaña de protesta nacional “¡El campo no aguanta más!” Esta inconformidad se ha manifestado en el 2003 en el lado mexicano de la frontera con mítines, marchas y cierres esporádicos de los puentes internacionales que enlazan El Paso y Ciudad Juárez, contribuyendo directamente al deterioro del tráfico internacional.

El mismo 11 de septiembre se cierra la frontera y se empiezan a implementar medidas más estrictas de seguridad conforme Washington las dicta. Emulando la Operación Intercepción de 1968, el operativo más

intenso de revisión fronteriza estadounidense hasta el 11 de septiembre – diseñado en ese entonces por la administración de Nixon para presionar económicamente a México a desempeñar un papel activo en la guerra contra el narcotráfico (Mann & Harrelson, 2002), todos los vehículos transitando a Estados Unidos se revisan a fondo y los documentos de viajeros, sobre todo peatones, se revisan detenidamente. El tiempo para cruzar a Estados Unidos se alarga de entre un promedio de 45 minutos, a dos ó tres horas. Estas medidas disminuyen el flujo peatonal, vehicular y comercial a un nivel alarmante, afectando inmediatamente la economía regional. Los productos de maquiladoras americanas y de otros países se empiezan a rezagar en el lado mexicano.

Bajan las ventas de menudeo y mayoreo en ambos lados de la frontera, y el público fronterizo posterga visitas y viajes de compras para evitar las largas filas y el posible amago por parte de las autoridades americanas. Es importante notar que el contrabando en general disminuye al aumentar el porcentaje en 2002 de estupefacientes (76%) y mercancía ilícita (293%) confiscados. Además se capturan varios fugitivos de la justicia americana, quienes previamente cruzaban de México a Estados Unidos con impunidad. Este resultado no pasa desapercibido en Estados Unidos, dónde se pregunta el público, ¿por qué no se ha revisado en la frontera de la misma manera anteriormente?

A pesar de concentrarse más elementos de las corporaciones federales de la patrulla fronteriza, aduanas y migración en los cruces fronterizos, se genera inicialmente una escasez de agentes federales, al no darse abasto de dicho personal. Esta crisis se resuelve temporalmente con la ayuda de la Guardia Nacional de Texas y Nuevo México, cuyos milicianos también son asignados a los aeropuertos de sus respectivos estados. Hay que hacer notar,

que se transfieren temporalmente varios agentes federales de la frontera con México a la frontera con el Canadá, exacerbando la escasez susodicha. La frontera septentrional de los E.E.U.U. tradicionalmente ha contado con pocos agentes, y temía Washington después del 11 de septiembre una infiltración terrorista a través del Canadá.

Dirigentes políticos, líderes cívicos, representantes de cámaras de comercio, asociaciones de transporte internacional, etc., en ambos lados de la frontera, principian abogar por un sistema de revisión más eficiente, con más agentes, y con nuevo equipo técnico para poder agilizar el tráfico y mejorar la economía fronteriza. Toda esta gestión política para lograr una administración eficaz de la frontera se realiza con los voceros locales del lado americano manifestando su empatía con la necesidad de mantener un sistema de revisión que responda a las exigencias de la política de seguridad nacional vigente. Interesantemente, por varias décadas han abogado estas entidades y dirigentes por mejoras aduanales, de migración y de infraestructura que permitan incrementar el flujo binacional humano y comercial, pero con escasos resultados.

El efecto cumulativo de violaciones a la soberanía nacional americana durante la década de los noventas (Bixler-Márquez, 1999), el resentimiento hacia los guiadores de transportes mexicanos y los hechos del 11 de septiembre aumentan la percepción negativa que tiene la prensa y el público americano de la frontera y su población. Los líderes cívicos de las organizaciones comerciales que piden alivio administrativo se les tacha como faltos de patriotismo e insensibles a los riesgos de la seguridad nacional que emanan de una ineficaz vigilancia de la frontera con México. Se hace hincapié en los medios de difusión y por voceros del gobierno que las comunidades fronterizas deben de comprender la magnitud del problema

y no deben esperar alivio a su situación inmediatamente (*The El Paso Times*, 2002b). La política electoral a todos los niveles maneja ese tema y ningún líder o candidato puede darse el lujo de ser tachado de no ser patriota. Las elecciones nacionales americanas del 22 de noviembre, por ejemplo, afectan la postura oficial del gobierno y de líderes políticos y cívicos sobre la frontera sur (México-Estados Unidos), ante las exigencias de la seguridad nacional.

Sin embargo, la atención federal también rinde resultados positivos en cuestiones de infraestructura. El nuevo programa de seguridad nacional autorizado por el congreso americano destina en 2002 a la frontera con México un costoso equipo de alta tecnología para la revisión de vehículos comerciales, trailers y contenedores CONEX para efectuar una mejor revisión.

El sector de El Paso recibe dos de los equipos, con su personal y programa de capacitación, por el alto volumen de carga que pasa por este sector fronterizo.

Asimismo, se autoriza y se diseña para implementarse en el año 2005 un sistema de revisión de documentos y rastreo electrónico que registrará a todo aquel que entra y sale de los E.U.U.U. legalmente. En la actualidad se revisa y registra sólo al entrar al país, en contraste con México que normalmente revisa documentos de migración al entrar y al salir del país -- después del once de septiembre más minuciosamente. El nuevo registro de salida ocasionará demoras en el flujo turístico y comercial de E.E.U.U. a México hasta que se implemente una manera logística eficaz para manejarlo. El falso rumor de que el alcalde de El Paso, Texas había sugerido ésta frontera para pilotear el nuevo sistema de registro del flujo humano bi-direccional ocasionó protestas por los portavoces de entidades comerciales y

sus agrupaciones en ambos lados de la frontera, a pesar de la inevitable implementación de éste sistema.

Precisa señalar que este tipo de equipo y personal se había pedido por varios medios y con gran frecuencia desde antes del 11 de septiembre. No es hasta que la mercadotecnia del pedido lo etiqueta como una medida primordial de seguridad nacional, y a un grado menor como estímulo al comercio regional, que accede el gobierno federal al pedido. Lo mismo sucede con el equipo electrónico para leer las nuevas visar láser. Este equipo había sido requerido desde hace tiempo; sin embargo, el servicio de inmigración no recibe el equipo para leerlas hasta después del 11 de septiembre, cuando se consideró que el equipo era vital para la seguridad nacional.

Vidali (2003) relata que el Plan de Acción de la Alianza para la Prosperidad de la Frontera México-EUA tiene 22 puntos con tres vertientes para crear una frontera “inteligente y dinámica.” Este plan atentará lograr esa meta por medio de una moderna infraestructura, un seguro y eficiente pase de gente y un tráfico comercial más ágil. Este acuerdo indica que la cooperación binacional administrativa sobre la frontera es políticamente factible si la seguridad nacional americana se perfila adecuadamente en los esfuerzos cívicos para forjar una frontera inteligente. Por consecuencia, la política de las comunidades fronterizas y la política exterior de ambos países deben ubicar sus metas comerciales en el marco de seguridad nacional americano, aunque a estas alturas la relación binacional no pueda rendir los resultados deseados en áreas como la política migratoria. Es posible acordar en unas áreas y proseguir en ellas mientras se difiere en otras, en acuerdo con la relación entre México y Estados Unidos de los últimos años.

Política Migratoria

La inmigración de México a Estados Unidos, el estado legal de la población indocumentada de origen mexicano y la transmigración fronteriza son temas relacionados que aborda este análisis; de forma limitada por la amplia gama de ramificaciones del tema. Como acertadamente señala Santibáñez Ramillón (1999), la frontera es un observatorio natural del fenómeno migratorio, ya que el flujo migratorio está estructurado alrededor de una fuerza laboral binacional. La política migratoria se aplica en la frontera primero como punto inicial de contacto entre inmigrantes y autoridades federales. Aunque los dirigentes de los sectores públicos y privados de ambos países reconocen su interdependencia económica y lo que implica esta para el proceso de migración, el sentimiento político nativista y anti-inmigrante en Estados Unidos continúan siendo barreras difíciles para el logro de un acuerdo binacional que mejore la situación migratoria.

El rápido aumento de la población latina en los Estados Unidos, particularmente la de origen mexicano, es causa de alarma en la nación. El censo del año 2002 arroja una cifra de 35 millones de habitantes de origen latinoamericano, de la cual 20 millones son de origen mexicano (U.S. Bureau of the Census, 2001). En 2003 el censo actualizado indica que la población latina sobrepasa los 37 millones, siendo más de 21 millones los habitantes origen mexicano, convirtiéndose esta población en el grupo étnico minoritario más grande en el país. Más del 50% del crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos durante la última década se debe a inmigrantes, la mayoría latinos. Además, Passel (2001) revela que en el año 2000 había alrededor de 8.5 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. México es la fuente principal de la población indocumentada con 4.7 millones. Estas tendencias demográficas ya se manifiestan en la política

y la economía estadounidense, lo cual es resentido en varios sectores de la población americana, indica Gillman (2001), resultando en el desarrollo de agendas sociopolíticas de carácter nativista y anti-inmigrante. Castro (1999) nota una convergencia de restricciones a la inmigración con la agenda nativista, la agenda nacionalista y esfuerzos para militarizar la frontera sur.

En julio de 2002 el Presidente de México Vicente Fox y el ex-Canciller Jorge Castañeda proyectaron en Tijuana, Baja California, mantener firme la política de México sobre migración, amnistía y el trato del indocumentado. Al mismo tiempo reconocieron que la preocupación estadounidense con la seguridad nacional prevenía cualquier discusión bilateral seria sobre estos temas. A pesar del voto que tiene México en las Naciones Unidas sobre la cuestión de Irak, los EEUU no han demostrado interés en abordar esos temas, por lo menos públicamente, al nivel que México desea para beneficio de su ciudadanía en los EEUU y futuros inmigrantes (Preston, 2002). Esta tendencia se aprecia en actos legislativos como el que reporta Salinas (2002) sobre la unificación familiar y la “legalización adquirida,” pendiente en el congreso americano. Esta legislación carece del apoyo de la administración del presidente George Bush en 2002, por la situación de seguridad nacional. Las gestiones diplomáticas del embajador estadounidense en México, Tony Garza, también ejemplifican dicha tendencia. Prematuramente anunció Garza algunas posibilidades sobre los temas de amnistía y migración. Resultó que sus iniciativas no contaban con el apoyo del Presidente Bush, teniendo Garza entonces que retraerlas (Winer, 2002).

Uno de los puntos de intenso diálogo diplomático entre EEUU y México trata con el programa de visas americanas en base de la ley de reunificación familiar. México pide que se aumente el número de visas bajo

esta ley, o sea que se mantenga y expanda la preferencia de visas para familiares de mexicanos en EEUU. Esta postura choca con una tendencia ascendiente de privilegiar con visas aquellos que tengan altos niveles de escolaridad y destrezas técnicas para mejorar la competitividad de la fuerza laboral americana. Editoriales en revistas y periódicos de circulación nacional, como las de Samuelson (2001) y Zuckerman (2002) en la revista *U.S. News & World Report*, reconocen que la economía necesita inmigrantes, pero concluyen que deben ser con las destrezas susodichas. Además, alegan que el inmigrante latino - para muchas publicaciones y organizaciones todos son vistos como mexicanos - no se asimila como otros grupos y que su volumen excede la capacidad de los sistemas sociales y educativos para americanizarlos. Se argumenta también, como si ese no hubiese sido el caso con otras generaciones de inmigrantes, que el inmigrante latino tiene un nivel muy alto de criminalidad y costo económico por los servicios sociales que requiere.

La opinión pública americana sobre el inmigrante y la frontera sur, sobretodo en sectores nativistas, orilla al endurecimiento del trato del inmigrante. La situación en la frontera de Sonora con Arizona, donde “se caza” a los inmigrantes indocumentados por grupos de vigilantes, es sólo un ejemplo de los extremos del trato del inmigrante a cual ha llegado este endurecimiento (Reséndiz, 2002; Ibarra, 2002). Argumenta Vargas Arena (1998) que la violencia contra el inmigrante mexicano se percibe como resultado de una “invasión silenciosa” que amenaza la economía, seguridad y bienestar de la sociedad estadounidense. La resistencia hacia el programa de matrícula consular mexicano organizada por el sector conservador estadounidense en 2003, por ejemplo, se debe a la percepción pública de que ésta medida administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de

México medio-legaliza al indocumentado mexicano, lo que contribuye a que continúe dicha invasión con impunidad.

La ineficacia de agencias federales para vigilar la porosa frontera y las dificultades que sus agentes y administradores encuentran se han dado a conocer con mayor frecuencia en la prensa después del 11 de septiembre (Martínez, 2002). Casos recientes como el del francotirador juvenil que fue puesto en libertad por el servicio de inmigración y luego mató a varias personas en Washington, D.C. y otras regiones, el asalto de los agentes de FBI en Anapra, Nuevo México, contiguo a El Paso, Texas (Terrazas, 2002) y el nacionalmente televisado desembarco de haitianos en la Florida en 2002 refuerzan visualmente la percepción pública del contenido de los editoriales susodichos, que también clamoreaban por la reestructuración del servicio de inmigración -- lograda con la formación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003. Toda esta actividad, por parte de los medios de comunicación masiva, aumenta la percepción pública de que la nación está siendo invadida y que hay que combatir seriamente esa invasión.

Un ejemplo sobresaliente es el libro *Invasión*, por Michelle Malkin (2002), quien presenta al público americano un perfil de inercia, corrupción, complicidad e indeferencia burocrática del gobierno americano hacia la inmigración indocumentada y la seguridad nacional. Malkin incluye los casos de los terroristas del 11 de septiembre y varios otros ejemplos que crean una percepción, para la cual ofrece amplia documentación, de que la nación está siendo invadida y sobretodo, que continua vulnerable al terrorismo. Principia su texto con las palabras que ella supone habrían emanado de la boca del terrorista Mahoma Atta en “el infierno” después del 11 de septiembre: “Las puertas de Estados Unidos se mantienen totalmente abiertas.” Esta escalofriante alerta de Malkin se comenta ampliamente en

medios de difusión internacionales, particularmente en la conservadora cadena nacional de televisión Fox.

El costo económico de la presencia del inmigrante indocumentado siempre ha sido muy debatido, sobretodo el costo de servicios sociales, educación y atención médica. La frontera tiene costos adicionales de esa índole. Un factor que genera resentimiento americano hacia el inmigrante es el costo para las cárceles municipales en la frontera de encarcelarlo por cometer delitos federales, incluso el de ingresar al país ilegalmente. El congreso americano en 2002 rehusó la reautorización del programa SCAAP, mediante el cual las comunidades fronterizas reciben un subsidio para cubrir el costo de procesar legalmente indocumentados y personas acusadas de crímenes federales como el narcotráfico, contrabando, etc. El Paso recibe \$772, 000 de los \$546 millones que se otorgan a nivel nacional para este propósito (*The El Paso Times*, 2002c). Las comunidades fronterizas no pueden ni quieren absorber este costo. En el caso de El Paso, la cárcel del Condado frecuentemente ha amenazado con no aceptar reos federales sin la remuneración adecuada. Estos casos son ejemplos de áreas de necesidad fronteriza cuyo alivio también depende de la habilidad del liderazgo regional para proyectarlos legítimamente bajo el programa de seguridad nacional.

Otro caso similar es el costo de proveer servicios de salud por parte de hospitales y clínicas municipales americanas a gente indocumentada (Brezosky, 2002). Cuando el hospital regional de El Paso, Texas solicita en 2002 un aumento de presupuesto para cubrir un gasto de 30 millones de dólares, lo cual requiere aumento de impuestos, argumentando que estos subirán debido al creciente número de usuarios indocumentados, también se genera un sentimiento anti-inmigrante en la población, incluso por parte de la de origen mexicano.

El caso reciente de Jessica Santillán, la joven que falleció durante una intervención quirúrgica en 2003 para transplantarle un corazón, ocasiona preocupación e ira en ciertos sectores de la sociedad americana. Se descubrió que su madre pagó a un “coyote” para que la introdujera ilegalmente al país, hasta Carolina de Norte, para obtener atención médica fuera de su alcance en Jalisco, México. Reporta MacLaggan y Torres (2003) que la reacción en El Paso, Texas al caso de Jessica Santillán varía ampliamente, desde los que se oponen a que se proporcione cuidado médico a indocumentados hasta los que tratan el caso como uno de necesidad humana y no de legalidad. Washington-Valdez (2003) reporta que los inmigrantes reciben el 5% de los transplantes de órganos, siendo este límite auto establecido por la Alianza del Suroeste de Transplantes. Hay que notar que los inmigrantes también contribuyen a la cosecha de órganos, aunque esa importante contribución, en algunos casos de inmigrantes fallecidos al tratar de cruzar a los E.E.U.U., no es ampliamente reconocida.

Educación Superior

En este período de máxima seguridad nacional, la educación superior americana en la frontera y la población estudiantil trans-migrante mexicana. Este estudiantado cruza frecuentemente de México a E.E.U.U. para estudiar en planteles estadounidenses y está siendo afectado por las normas administrativas que rigen su estadía y acceso al país. Esta sección aborda el caso de los estudiantes de educación superior, aunque la cuestión de estudiantes extranjeros abarca a toda la nación e incluye también a estudiantes párvulos, de primaria, secundaria y preparatoria.

Smith (2002) reporta que después del 11 de septiembre el flujo estudiantil del extranjero ha aumentado, no obstante las nuevas restricciones administrativas o la aplicación de las que ya estaban en vigor. Las escuelas

privadas, públicas e instituciones de educación superior en el lado americano de la frontera siempre han tenido un número substancial de estudiantes mexicanos y, en grado menor, de otros países. Bajo el programa de seguridad nacional, la aplicación de una ley ya establecida que requiere que estos estudiantes estén matriculados tiempo completo y crucen con visa de estudiante iba afectar adversamente la matrícula de las instituciones de educación superior de El Paso. El Colegio de la Comunidad tiene más de 4,000 estudiantes y la Universidad de Texas en El Paso alrededor de 2,000 estudiantes que serían afectados por esta ley (Abrams, 2002). Legisladores federales de la frontera obtuvieron una prórroga sobre el requisito de matricularse tiempo completo, y también se les dio tiempo a los estudiantes de obtener la visa adecuada. Interesantemente, esta dispensación se vino a dar después de concluir que estudiantes canadienses y de otros aliados americanos serían adversamente afectados al no estar éstos matriculados tiempo completo. Además, la industria maquiladora en el lado mexicano tiene un número de profesionistas que estudian maestrías o doctorados en Estados Unidos, lo cual para un empleado de tiempo completo significa poder estudiar sólo un par de cursos por semestre. Estas industrias, la mayor parte americanas, apoyaron la acción política a favor del estudiantado transmigrante, ya que es clave para la actualización de su personal.

El impacto económico de la restricción de estudiantes mexicanos en las instituciones de educación superior americanas en la frontera hubiese sido devastador, cuando se considera que los presupuestos universitarios están disminuyendo según la economía afloja y los ingresos de impuestos hacen lo mismo. Un editorial del periódico *The El Paso Times* (2003d) reconoce el problema que genera la aplicación de la ley para las

comunidades fronterizas, pero lo subordina a las exigencias de la seguridad nacional.

Malkin (2002) también ingresa con gran ahínco en el tema del papel que desempeñan las instituciones de educación superior, como grupo de presión, en crear un patrón de vigilancia ineficaz de la población estudiantil extranjera en la nación. Califica despectivamente a las instituciones de educación superior como “padrotes” (p.69) al servicio de estudiantes extranjeros. Los acusa de carecer de patriotismo y, con bastante evidencia, de que sólo bajo presión legal aplican las leyes y reglamentos federales. Cita como evidencia los casos de los terroristas del 11 de septiembre que se introdujeron al país con visa de estudiantes y otros casos sobresalientes de violaciones a la soberanía nacional facilitadas por instituciones académicas. Identifica a la Asociación de Educadores Internacionales como la promotora principal de los intereses de universidades con estudiantes extranjeros, a costa de la seguridad nacional. Esta fuerte y verificable alerta al público americano, aunque distorsionada, crea una imagen negativa del estudiante extranjero y de inmigrantes en general, dado el número de éstos que eventualmente se queda en el país, legal o ilegalmente. Schemo (2003) describe la implementación del sistema de monitoreo de estudiantes próximo a implementarse como medida de seguridad nacional y también revela como muchos líderes académicos resisten su implementación como una imposición burocrática.

Otro ejemplo de impacto a la educación superior en la frontera americana ocasionado por la convergencia de reducciones al presupuesto de Texas con la agenda nacionalista y la anti-inmigrante es el debate legislativo en este estado sobre la posible eliminación del programa PASE. Este programa permite a estudiantes mexicanos que residen en la franja fronteriza

con Texas matricularse en universidades Tejanas al mismo costo del que pagan los ciudadanos de Texas, que es un 75% más barato que el costo de la matrícula que estipula la ley para el estudiante extranjero. Si se aprueba esta legislación, el alumnado mexicano, cuyo número es mayor en la zona fronteriza en Texas, se reducirá drásticamente, afectando al estudiante y a las universidades. El argumento a favor del Programa PASE, como en su génesis hace años, es que Texas se beneficia a largo plazo política y económicamente de ser la sede de educación superior de un importante segmento de liderazgo mexicano en la frontera. Si embargo, la existencia del programa PASE aún está en peligro durante la sesión legislativa en Texas del 2003.

Conclusiones

Las comunidades fronterizas deben proyectar sus necesidades de manera que se articulen favorablemente con los programas federales de patrocinio financiero, los reglamentos federales de protección y la política estatal de desarrollo económico vigentes. La habilidad de usar mercadotecnia pragmática para avanzar simultáneamente los intereses regionales con los nacionales, es clave para solventar el impacto regional de la crisis del 11 de septiembre y crear una frontera adecuada a las necesidades globales del nuevo milenio. La cooperación binacional es indispensable para resolver problemas y salir adelante. Jeffrey Jones, senador estatal de Chihuahua, quien representa una región próxima a la frontera, elocuentemente argumenta a favor de la acción regional: “la relación de México y E.E.U.U. se da en la frontera. De la frontera deben salir soluciones e iniciativas basadas en un concepto regional binacional.” Vidali (2003) añade que se requiere un diálogo sistémico sobre la frontera y sus problemas por las entidades binacionales a las que les conciernen. En el

primer trimestre de 2003, la población fronteriza escucha con optimismo, y alguna reserva, las palabras de Tom Ridge (2003) Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, quien promete en un discurso a los representantes de la Asociación Nacional de Municipios que resguardará adecuadamente la nación en sus fronteras, pero con métodos, infraestructura y tecnología que agilizará el comercio y movimiento de personas en estas zonas vitales para la seguridad nacional.

Queda por resolverse la más controvertida y difícil situación de la amnistía y inmigración, que continúa siendo la prioridad de la relación México-Estados Unidos, asegura el nuevo canciller de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez (2003). También vaticina Derbez una solución a los problemas de migración a largo plazo, en incrementos pequeños, según lo permitan las normas de seguridad nacional estadounidense en vigencia.

Bibliografía

- Abrams, Jim. (2002). House OKs new border-student visa status. *The El Paso Times*, Oct. 16, P. 6-A.
- Associated Press/ El Universal. (2002). En cumplimiento con el Tratado de Libre Comercio quita Estados Unidos restricciones a camiones mexicanos. *Norte*, Nov. 28, P. 1-B.
- Bixler-Márquez, Dennis J. (1999). Antecedentes de la Operación Salva Guarda. *Acta del Cuarto Congreso Internacional de Historia Regional*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
- Brezosky, Lynn. (2002). Border hospitals tally up costs of treating Mexicans. *The El Paso Times*, Nov. 17, P. 4-b.
- Bustos, Sergio. (2003). Bush administration working to protect U.S. borders. *The El Paso Times*, Feb. 4., P. 2-A.
- Bustos, Sergio & Brogan, Pamela. (2003). Daunting task awaits border security chief. *The El Paso Times*, Feb. 27, P. 4-A.
- Castro, Max J. (1999). Toward a new nativism? The immigration debate in the United States and its implications for Latin America and the Caribbean. En Max J. Castro (Ed.), *Free Markets Open Societies: Trends in International and Immigration Policy in the Americas*. Miami: North-South Press, 143-156.
- Derbez, Luis Ernesto. (2003). Discurso en la Reunión de Cónsules Mexicanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Tucson, AZ, Mar. 6, 2003. Reportado en GALAVISION.
- Fox, Vicente & Castañeda, Jorge. (2002). Coloquio sobre la Relación México-E.E.U.U., Secretaría de Relaciones Exteriores/Universidad Iberoamericana, Tijuana, BC, junio 12-13.

- Gillman, Todd J. (2001). A gateway into a national debate: Some communities react negatively to flood of Hispanic immigrants changing the face of America. *The Dallas Morning News*, Aug. 19, 2001, P. 5-J.
- Heyman, Josiah McC. (2001). U.S. ports of entry in the Mexican border. *Journal of the Southwest*, Vol. 43, (4), 681-700.
- Ibarra, Ignacio. (2002). Tombstone militia will risk arrest: Group to patrol stations set up to aid entrants. *Arizona Star*, Dec. 4, 2002. Disponible de www.elcambiohispano.com
- Jaret, Charles. (2002). Troubled by newcomers: Anti-immigrant attitudes and actions during two eras of mass migration. In *Mass Migration to the United States*, Pyiop Gan Min, (Ed.). Walnut Creek, CA: AltaMira Press, Pp. 21-63.
- Jones, Jeffrey. (2002). (Senador del Estado de Chihuahua, México). Conferencia Plenaria. Simposio Ambiental sobre la Frontera México-E.E.U.U. Universidad de Texas en El Paso. El Paso, Texas, Sept. 27, 2002.
- MacLaggan, Corrie & Torres, Zahira. (2003). Mexican teen's death stirs debate: Some are angered that Jessica's Santillán's parents brought her to the U.S. illegally for medical care. *The El Paso Times*, March 2, Pp. 1A-2A.
- Malkin, Michelle. (2002). *Invasion: How America Still Welcomes Terrorists, Criminals and Other Foreign Menaces to Our Shores*. Washington, D.C.: Regnery Publishing, Inc.
- Mann, Ron (Director) & Harrelson, Woody (Narrador). (1999). *Grass*. Documental sobre la historia de la marihuana en Estados Unidos. (Canadiense).
- Mathews, Jessica. (2002). September 11, one year later: A world of change. *Carnegie Endowment Policy Brief*, (Edición especial # 18), P.1.

- Martínez, Andrés. (2002). Policing a fine, porous line across the perilous western desert corridor. *The New York Times*, Oct.14, P. A-20.
- Passel, Jeffrey. (2002). New estimates of the undocumented population in the United States. *Migration Information Source*, Disponible de source@migrationinformation.org May 22, Pp. 1-3.
- Piñeyro, José Luis. (2003). Mexico's northern border, safe and smart? *Visions of Mexico*, (62), 10-13.
- Preston, Julia. (2002). Its swing vote in the council gives Mexico more muscle. *The New York Times*, October 25, P. A-14.
- Reséndiz, Julián. (2002). Aumentan abusos de las autoridades. *El Diario*, P. 6-A.
- Ridge, Tom. (2003). Conferencia Plenaria, Conferencia Legislativa del 2003. Asociación Nacional de Condados. Marzo 3, CSPAN1. Disponible de CSPAN.ORG
- Salinas, María Elena. (2002). *The El Paso Times*, Nov. 17, P. 1-A.
- San Jose Mercury News. (Editorial). (2002). Mixed Messages: Garza's amnesty statement was a bit premature. En *The El Paso, Times*, P. 14-B.
- Santibáñez Ramillón, Jorge E. (1999). Migratory flows between Mexico and the United States. En Max J. Castro (Ed.), *Free Markets Open Societies: Trends in International and Immigration Policy in the Americas*. Miami: North-South Press, 143-156.
- Samuelson, Robert J. (2001). Can America assimilate? The census shows we're an immigrant nation. We dare not become a swarm of 'minorities'. *Newsweek*, April 9, 2001, P.42.
- Schemo, Diana Jean. (2003). Electronic tracking student system monitors foreign students. *New York Times*, Feb.17, P. A-10.

- Smith, Diane. (2002). More foreign students come to U.S. despite federal scrutiny, report says. *The El Paso Times*, Nov. 19, P. 7-B.
- Storrs, Larry K. (2000). *Mexico-U.S. Relations: Issues for the 16th Congress*. National Council for Science and the Environment. CRS Report: IB10047, Pp. 1-14.
- The El Paso Times. (2002a). Editorial: Security top priority: 9/11 created many inconveniences for border areas, Sept. 16, P. 2-A.
- The El Paso Times. (2002b). Editorial: Borders crucial, Oct. 29, P. 6-B.
- The El Paso Times. (2002c). It's a federal duty, Bush should support SCAAP funding. Oct. 28, P. 6-B.
- The El Paso Times. (Editorial). (2003). A more secure border, Jan. 12, P. 6-B.
- Terrazas Sáenz, Rubén. (2002). Caso Anapra: Amagan con más protestas. *El Diario*, Nov. 17, P. 12-B.
- U.S. Census Bureau. (2001). Table DP-1 *Profile of General Demographic Characteristics for the United States: 2000*. Disponible de <http://www.census.gov>.
- Vargas Arenal, Valentín. (1998). La Política migratoria de México. En Manuel Angel Castillo, Alfredo Lattes & Jorge Santibáñez Ramillón, (Eds.), *Migración y Fronteras*. Tijuana, B.C.: El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México & La Asociación Mexicana de Sociología, 455-562.
- Vidali, H. Carlos. (2003). Binational Economic Partnerships. Mexico-North Research Newtwork Meeting. San Antonio, TX, Feb. 28-Mar. 1.

- Washington-Valdez, Diana & Bustos, Sergio. (2002).
Migrant care cost El Paso 30 million. *The El Paso Times*, Sept. 26, Pp. 1-A-2-A.
- Washington-Valdez, Diana. (2003). Immigrants get 5% of U.S. organ
Transplants. *The El Paso Times*, Mar. 2, P. 2-A.
- Winer, Tim. (2002). The U.N. debate: Holding swing vote,
Mexico tells Bush it won't support Iraq resolution U.S.
favors. *The New York Times*, Sept. 28, PA-11.
- Winer, Tim. (2003). Along borders, tension and uncertainty prevail.
The New York Times, March 2, P. A-10.
- Zuckerman Mortimer B. (2002). Our rainbow underclass.
U.S. News & World Report, Sept. 23, P. 118.